



**Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes**

Distr. general
18 de diciembre de 2009
Español
Original: chino

Comité contra la Tortura

**Examen de los informes presentados por los
Estados partes en virtud del artículo 19 de la
Convención**

**Observaciones del Gobierno de la República Popular China*
respecto de las conclusiones y recomendaciones del Comité
contra la Tortura (CAT/C/CHN/CO/4)**

[9 de diciembre de 2009]

* Con arreglo a la información transmitida a los Estados partes acerca de la publicación de sus informes, el presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

Respuesta del Gobierno de China a las observaciones finales del Comité contra la Tortura

El 3 de diciembre de 2008, el Gobierno de China presentó sus comentarios respecto del informe relativo a las observaciones finales del Comité contra la Tortura, en que se examinaba el cumplimiento por el Gobierno de China de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y mostró su posición de principio respecto de estas. En el presente documento, el Gobierno de China sigue dando respuesta a cada una de las preguntas concretas planteadas en los párrafos 11 a 37 de las observaciones finales (véase el anexo).

Como ya señaló en sus comentarios, China considera que en las observaciones finales figuran varios argumentos y comentarios que no se ajustan a la realidad y que resultan inaceptables. Respecto de las numerosas preguntas planteadas en las observaciones finales, China ya proporcionó información en el informe presentado al Comité y en el diálogo mantenido con este. El Gobierno chino espera que la presente respuesta a las observaciones finales ayude al Comité a tener una comprensión más completa y objetiva de los esfuerzos y los logros del Gobierno chino en el ámbito de la lucha contra la tortura.

Como país signatario de la Convención y conforme a las disposiciones incluidas en esta, el Gobierno chino cumplirá debidamente sus obligaciones internacionales y continuará desplegando incansables esfuerzos en el ámbito de la lucha contra la tortura y demás ámbitos relativos a la protección de los derechos humanos. En este proceso, el Gobierno chino está dispuesto a seguir promoviendo la cooperación y los intercambios internacionales en el ámbito de los derechos humanos sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.

Respuesta del Gobierno chino a las preguntas concretas planteadas en las observaciones finales (párrafos 11 a 37)

1. En relación con el párrafo 11 de las observaciones finales "Práctica generalizada de la tortura y de los malos tratos e insuficiencia de las salvaguardias durante la detención"

El Comité afirmó que "sigue profundamente preocupado por las continuas denuncias, corroboradas por numerosas fuentes jurídicas de China, de la utilización generalizada de la tortura y de los malos tratos de los sospechosos durante la detención policial, especialmente para obtener confesiones o información que se utilizará en las actuaciones penales". El Gobierno chino considera que la afirmación anterior dista enormemente de la realidad.

En primer lugar, en la legislación china queda expresamente prohibido el uso de la tortura para obtener una confesión. En virtud del artículo 46 del Código de Procedimiento Penal de China, si la única prueba de que se dispone es la confesión del imputado, este no puede ser declarado culpable ni sancionado. En el artículo 43 del Código se establece que los jueces, los fiscales y los investigadores deberán reunir pruebas de conformidad con el proceso legalmente establecido y estará estrictamente prohibido el uso de la tortura para obtener una confesión o recurrir a la amenaza, la incitación, el engaño u otros medios ilícitos para reunir pruebas. Además, en el artículo 61 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo respecto de varias cuestiones relativas a la aplicación del Código de Procedimiento Penal de la República Popular China y en el artículo 140 del Reglamento del

procedimiento penal para las fiscalías populares de la Fiscalía Popular Suprema figuran disposiciones más detalladas respecto de la prohibición del uso de métodos ilícitos para la obtención de pruebas.

En segundo lugar, en materia de cumplimiento de la ley, los órganos de seguridad pública de China han adoptado una serie de medidas destinadas a prevenir el uso de la tortura para obtener una confesión, con las que se han obtenido resultados considerables.

Las medidas han consistido en: a) fortalecer la capacitación de la policía popular en materia de cumplimiento de la ley para perfeccionar sus conocimientos en materia de leyes, procedimientos y derechos, y mejorar el nivel de cumplimiento de la ley y de desempeño de sus funciones; b) aumentar la inversión en infraestructura relacionada con la investigación penal, incluidas las técnicas de investigación penal y la recopilación de información confidencial, para mejorar la capacidad de detección, acumulación y utilización de pruebas materiales por los órganos de seguridad pública, con el fin de evitar la dependencia de los investigadores respecto de las confesiones; c) hacer cumplir rigurosamente la disciplina a fin de prevenir estrictamente el uso de la tortura para obtener una confesión. Además, los órganos de seguridad pública están estudiando activamente la posibilidad de establecer un sistema de grabación audiovisual para los interrogatorios; y d) aceptar escrupulosamente la supervisión para proteger plenamente los derechos e intereses legítimos de los sospechosos de un delito. Los órganos de seguridad pública de todos los niveles de China cuentan con departamentos especializados de supervisión del cumplimiento de la ley, que supervisan las actividades de la policía civil e investigan y tramitan los casos de violación de la ley o de las normas de disciplina por agentes de la policía popular. Además, los órganos de seguridad pública de todos los niveles también son objeto de escrutinio por la Asamblea Popular Nacional, el Gobierno, el Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, las fiscalías populares y los medios de comunicación y la sociedad.

Ciertamente, en los últimos años se han producido casos aislados de uso de la tortura para obtener una confesión, pero no se trata de un fenómeno común en China. A continuación, el Gobierno chino seguirá aclarando las cuestiones concretas planteadas en las observaciones finales.

a) Respetto del comentario relativo a que "[n]o se los hace comparecer rápidamente ante un juez y se los mantiene en detención policial, sin formular cargos, hasta 37 días y en algunos casos durante más tiempo"

En el Código de Procedimiento Penal de China se establecen los plazos de detención de un sospechoso durante la fase de investigación. En virtud del artículo 69 del Código, si los órganos de seguridad pública consideran necesario mantener bajo custodia a un sospechoso deberán solicitar, dentro de los tres días posteriores a la detención, un examen del caso y la autorización de la Fiscalía Popular. En circunstancias especiales, ese plazo podrá prorrogarse de uno a cuatro días. Si se trata de un sospechoso importante que haya cometido delitos en varios lugares, de manera repetida o en asociación con otros, el plazo podrá ampliarse a 30 días. La Fiscalía Popular deberá decidir si autoriza el régimen de detención preventiva en un plazo de siete días tras la recepción de la solicitud presentada por un órgano de seguridad pública.

Conforme a esa ley, el plazo de detención preventiva del presunto autor de un delito por los órganos de seguridad pública de China se divide en dos partes: por una parte, el plazo de que disponen los órganos de seguridad pública para solicitar a la fiscalía que autorice la detención preventiva; en función de la complejidad y el grado de dificultad de un caso, el plazo será de 3, 7 ó 30 días. Por otra parte, el plazo de 7 días de que dispone la fiscalía para decidir si autoriza la detención preventiva. En la práctica, los órganos de seguridad pública cumplen estrictamente los plazos estipulados de detención de un sospechoso, por lo que el régimen de detención de hasta 37 días no se aplica de manera

generalizada a todos los sospechosos. Tras la detención del presunto autor de un delito, la ampliación hasta 30 días del plazo para solicitar la detención preventiva se restringe a las siguientes circunstancias especiales: cuando los delitos se hayan cometido en varios lugares, de manera repetida o en asociación con otros. Si la fiscalía no autoriza la detención preventiva del presunto autor de un delito, los órganos de seguridad pública deberán ponerlo inmediatamente en libertad.

b) Respetto del comentario relativo a que "[n]o se lleva un registro sistemático de todos los detenidos, ni se registran todos los períodos de detención preventiva"

China lleva un registro sistemático de todos los detenidos y registra todos los períodos de detención preventiva. Los centros de detención de China mantienen bajo custodia al presunto autor de un delito previa obtención de la correspondiente orden y llevan un registro sistemático, que incluye el nombre, sexo, edad, domicilio, unidad de trabajo, miembros de la familia, presunto delito, entidad que instruye la causa, etc. Además, el centro de detención realiza un registro detallado del período de detención preventiva en cada etapa de los procedimientos judiciales, a saber la investigación, la calificación de los hechos y el juicio. En caso de que el plazo de detención esté a punto de expirar, el centro de detención lo notificará a la entidad que instruya la causa para que haga las diligencias debidas de manera inmediata a fin de prorrogar el plazo. Además, los fiscales asignados a los centros de detención por los órganos fiscales también llevan un registro minucioso de la duración del período de detención preventiva de todos los detenidos. El centro de detención también transmitirá electrónicamente a la fiscalía la información relativa al detenido para facilitar la supervisión en tiempo real. En la sentencia y el fallo del tribunal también figurarán claramente las fechas relativas a la detención preventiva con el fin de rebajar la duración de la condena correspondiente.

c) Respetto del comentario relativo a que "[s]e les restringe el acceso a abogados y a médicos independientes, y en el momento de la detención no se los informa de sus derechos, en especial su derecho a ponerse en contacto con sus familiares"

El artículo 96 del Código de Procedimiento Penal de China establece claramente que el sospechoso podrá, tras ser interrogado por primera vez por el órgano de instrucción o desde el día de la adopción de las medidas coercitivas (incluido el encarcelamiento), contratar a un abogado para que lo asesore o para que presente en su nombre peticiones o quejas. En casos relacionados con secretos de Estado, el sospechoso podrá contratar a un abogado previa autorización del órgano encargado de la investigación. En la práctica, los organismos encargados de hacer cumplir la ley ayudan al sospechoso o a su familia a designar a un abogado, contratan a un abogado para sospechosos que tengan dificultades económicas y proporcionan asistencia letrada gratuita. Respecto de la solicitud de un abogado para visitar a un sospechoso o inculpado, el centro de detención, tras examinar la documentación pertinente, organizará la visita conforme a lo dispuesto en la ley.

Todos los centros de detención disponen de personal médico, por lo que un detenido que se ponga enfermo puede recibir el tratamiento oportuno; en caso de enfermedad grave, el detenido puede quedar en libertad bajo fianza conforme a la ley. En los últimos años, un número creciente de centros de detención ha concertado arreglos de colaboración con los hospitales comunitarios para atender las necesidades médicas de los detenidos, mediante los cuales los hospitales comunitarios asignan a un número determinado de médicos a los centros de detención para tratar a los detenidos. Además, el Reglamento de trabajo de los centros de detención incluye disposiciones estrictas sobre los procedimientos de trabajo del personal médico en esos centros: los médicos deben examinar a un sospechoso o delincuente siguiendo el formato y contenido del formulario para el examen médico de un detenido. En caso de que el detenido presente alguna herida, el médico deberá tratar de averiguar la causa y hacerlo constar debidamente en el formulario, que incluirá la firma del

detenido y del funcionario competente. En caso de que el médico detecte un posible caso de tortura, el departamento competente realizará la investigación pertinente conforme a la ley. En caso de verificarse, se interpondrá una acción judicial contra su autor conforme a la ley.

En el Reglamento sobre los establecimientos de detención de China, y en sus medidas de aplicación, se definen claramente los diversos derechos de los detenidos. La entidad que instruye la causa informa al detenido de sus derechos; el centro de detención y el fiscal adscrito al centro también lo informan de sus derechos y suelen colocar en un lugar visible información sobre los derechos de que gozan por ley los detenidos. Además, en muchos lugares también se distribuyen a los detenidos tarjetas informativas sobre sus derechos. El abogado que haya contratado un detenido también le informará de los derechos de que goza por ley. Por otra parte, los departamentos encargados de supervisar el cumplimiento de la ley de los órganos de seguridad pública de todos los niveles verifican de manera prioritaria si los centros de detención cumplen este procedimiento, con el fin de proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los detenidos.

Respecto del derecho de un detenido a contactar con sus familiares. En la práctica, a no ser que ello perjudique a la investigación o no sea posible, los órganos encargados del cumplimiento de la ley de China, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, comunicarán a los familiares del detenido o a la unidad de trabajo el motivo de la detención y el lugar donde este se encuentra detenido en un plazo de 24 horas tras su detención.

d) Respecto de los comentarios relativos a que se siga utilizando la confesión como forma corriente de prueba de cargo; a que el Código de Procedimiento Penal de China siga sin prohibir expresamente que las confesiones obtenidas bajo tortura no se utilicen como prueba ante los tribunales, como lo exige el artículo 15 de la Convención; y al caso de Yang Chunlin

El Código de Procedimiento Penal de China establece que las declaraciones y explicaciones de un sospechoso o inculpado podrán servir de prueba, aunque solo serán un medio probatorio más del procedimiento penal. Al mismo tiempo, en el artículo 46 del Código se establece que, si la única prueba de que se dispone es la declaración del inculpado, este no podrá ser declarado culpable ni condenado. En el Código también se prohíbe expresamente el uso de la tortura para obtener una confesión. Conforme al artículo 43, los jueces, los fiscales y los investigadores deberán reunir pruebas de conformidad con el proceso legalmente establecido y estará estrictamente prohibido el uso de la tortura para obtener una confesión o recurrir a la amenaza, la incitación, el engaño u otros medios ilícitos para reunir pruebas. En virtud del párrafo 61 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo respecto de varias cuestiones relativas a la aplicación del Código de Procedimiento Penal de la República Popular China, estará estrictamente prohibida la obtención de pruebas por medios ilícitos. Si se verifica que la declaración de un testigo o de una víctima o la confesión del inculpado ha sido obtenida mediante tortura o amenazas, incitación, engaño u otros medios ilícitos, esta no podrá servir de base para un fallo. En el artículo 140 del Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema sobre el procedimiento penal aplicable a las fiscalías populares se reitera que en el Código de Procedimiento Penal se prohíbe estrictamente el uso de la tortura para obtener una confesión. Además, en virtud del artículo 265, la confesión de un inculpado o las declaraciones de una víctima o un testigo obtenidas mediante tortura o amenazas, incitación, engaño u otros medios ilícitos no podrán servir de base para formular una acusación. En la circular relativa al desempeño de las funciones en estricta conformidad con la ley y el control eficaz de la calidad de la instrucción de causas penales, emitido conjuntamente en 2004 por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública, también se establece claramente que si la confesión de un sospechoso o inculpado o la declaración de

un testigo o de una víctima ha sido obtenida mediante tortura o amenazas, incitación, engaño u otros medios ilícitos, esta no podrá servir de fundamento en un fallo.

Conforme al segundo párrafo de la Resolución del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional destinada a facilitar la interpretación de la ley, según el cual corresponderá al Tribunal Popular Supremo interpretar las cuestiones relacionadas con la aplicación específica de leyes y decretos en los procesos judiciales y a la Fiscalía Popular Suprema interpretar esas mismas cuestiones en el ámbito de actuación de las fiscalías, la interpretación judicial relativa a cómo aplicar de manera específica las disposiciones del artículo 43 del Código de Procedimiento Penal de China será también jurídicamente vinculante y deberá ser observada por los órganos de investigación, los órganos fiscales y los órganos judiciales.

A la vez que se despliegan esfuerzos por prevenir el uso de la tortura para obtener una confesión, los órganos judiciales de China se esfuerzan también por reparar e indemnizar a las víctimas de los casos aislados de tortura que se hayan producido.

En opinión del Gobierno chino, en las disposiciones legales y la práctica judicial mencionadas queda demostrado que, en los procedimientos penales, China no se basa solamente en las confesiones de los sospechosos o inculpados, por lo que el comentario que figura en las observaciones finales según el cual China "sigue utilizando la confesión como forma corriente de prueba de cargo, lo cual crea condiciones que pueden facilitar la práctica de la tortura y los malos tratos de los detenidos" no concuerda con las disposiciones legales ni con la práctica judicial de China. Además, en la legislación china se prohíbe explícitamente el uso de la tortura para obtener una confesión, por lo que la observación relativa a que el Código de Procedimiento Penal de China "sigue sin prohibir expresamente esa práctica, como lo exige el artículo 15 de la Convención" es fruto de una mala comprensión del ordenamiento jurídico chino.

El caso de Yang Chunlin. Datos disponibles: Yang Chunlin, varón, nacido el 29 de julio de 1956, de etnia han, residente en Jiamusi, provincia de Heilongjiang, desempleado. El 27 de marzo de 2008, Yang Chunlin fue declarado culpable de incitación a la subversión del poder del Estado por el Tribunal Popular Intermedio de Jiamusi y condenado a cinco años de prisión y a dos años adicionales de privación de los derechos políticos. Los órganos de seguridad pública tramitaron este caso en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal y no hay indicios de que fuera torturado para obtener su confesión.

e) Respetto de los comentarios relativos a "[l]a falta de un mecanismo independiente y eficaz de supervisión de la situación de los detenidos"

En los últimos años, los órganos de seguridad pública de China, con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los detenidos en los centros de detención, han mejorado y perfeccionado continuamente los mecanismos de supervisión, en especial los mecanismos de supervisión externa.

Las fiscalías populares son órganos de supervisión jurídica y actúan con independencia del Gobierno. Las fiscalías populares son el órgano principal de supervisión jurídica de los centros penitenciarios y de detención de China. En las fiscalías populares de todos los niveles de China hay un organismo dedicado a la supervisión de los centros penitenciarios y de detención y se asignan fiscales permanentes a esos centros. En virtud de las medidas para la supervisión de los centros de detención por las fiscalías populares, los fiscales permanentes tienen mandatos claros, cuyas funciones incluyen supervisar la legalidad de las actividades de los centros de detención, la legalidad del período de detención de los sospechosos e inculpados en esos centros, la legalidad de la ejecución de la pena en los centros de detención y la legalidad de las actividades relativas a la apertura e

investigación de un caso por parte de los órganos de seguridad pública y de las actuaciones de los tribunales populares, así como tramitar las acusaciones, denuncias o quejas de los detenidos, sus representantes legales y familiares.

En la actualidad, en los órganos fiscales de todos los niveles hay más de 12.000 fiscales encargados de la supervisión de los centros de detención, de los cuales más de 8.800 están asignados directamente a prisiones y otros centros de detención. Hasta 2007, los órganos fiscales de China habían establecido 77 fiscalías permanentes en centros penitenciarios de gran tamaño o en áreas de concentración de prisiones y más de 3.300 oficinas fiscales permanentes en prisiones de tamaño mediano o pequeño o en centros de detención, que prestaban servicios de fiscalía a más del 98% de prisiones y centros de detención de todo el país. Además, en el reducido número de centros penitenciarios y de detención en que no había fiscalías ni oficinas fiscales permanentes, las fiscalías populares habían asignado a un fiscal con dedicación exclusiva, o bien un fiscal itinerante realizaba visitas a esos centros.

Los órganos fiscales desempeñan sus funciones de supervisión de diversas maneras. Los detenidos pueden solicitar oralmente o por escrito una cita con un fiscal permanente. Las instalaciones de detención están equipadas con buzones de denuncias, a los que tienen acceso los detenidos en todo momento. La llave de los buzones está en poder del fiscal permanente. La información relativa a las tareas de cumplimiento de la ley en el centro de detención se transmite electrónicamente al organismo fiscal permanente, lo que permite una supervisión dinámica y garantiza que el fiscal permanente examine la información de manera independiente y en todo momento y realice un monitoreo en tiempo real. Los órganos fiscales también establecen y perfeccionan sistemas de entrevista con el fiscal permanente, fijan la fecha de la entrevista y reciben las quejas de los familiares de los detenidos.

Además de la supervisión realizada por los órganos fiscales, el Gobierno chino dispone de otros medios para fortalecer la supervisión de los centros de detención, como la implantación en los centros de detención del sistema abierto de información sobre los servicios policiales, con el que se hacen públicos los sistemas y procedimientos operacionales pertinentes y que recibe la supervisión de la sociedad; la contratación de un supervisor del cumplimiento de la ley para poner en marcha un sistema de supervisión de los centros de detención por los diputados de la Asamblea Popular y miembros del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino; el examen periódico o extraordinario del funcionamiento de los centros de detención; la celebración periódica de una reunión de familiares de los detenidos para solicitar su opinión sobre las tareas de supervisión, etc.

2. En relación con el párrafo 12 de las observaciones finales "Condiciones de detención y casos de muerte de personas detenidas", "la falta de tratamiento para los drogadictos y las personas que viven con el VIH/SIDA", y "la falta de datos estadísticos sobre el estado de salud de los detenidos"

Los órganos de seguridad pública de China conceden gran importancia a la investigación de los casos de muerte de un detenido en los centros de detención. Para prevenir eficazmente y sancionar los casos de malos tratos y castigo corporal a un detenido, el uso de la tortura para obtener una confesión y los casos en que la negligencia del deber por parte de un agente de la policía civil haya provocado la muerte de un detenido en circunstancias anormales, los departamentos de los órganos de seguridad pública de supervisión de asuntos policiales de todos los niveles hacen hincapié en la realización de inspecciones *in situ* y exámenes exhaustivos para seguir mejorando la eficacia de las

supervisiones dinámicas. Por otra parte, mediante el establecimiento del sistema de vigilancia ininterrumpida y otras medidas se garantiza la investigación oportuna de casos destacados en que un detenido haya muerto o resultado herido. Además, si se descubren casos de tortura, maltrato o negligencia del deber por parte del personal del centro, los órganos fiscales abrirán un expediente para investigar el caso y procesar al personal implicado. En 2008, el número de detenidos que murieron en centros de detención de todo el país como consecuencia de las palizas propinadas por otros detenidos ascendió a 14, y los autores de esos delitos ya han sido sancionados conforme a la ley.

Desde 2009, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública han planificado y puesto en marcha conjuntamente medidas especiales de supervisión del cumplimiento de la ley en los centros de detención de todo el país para examinar el estado físico de todos los detenidos en los centros e inspeccionar las actividades diarias de gestión y cumplimiento de la ley en esos centros, a fin de evitar que se produzcan muertes en circunstancias anormales y otros incidentes; y se ha creado un sistema que permite que los órganos de seguridad pública realicen en cualquier momento una inspección *in situ* de los centros penitenciarios y de detención previa presentación de la autorización correspondiente, a fin de detectar oportunamente cualquier problema destacado en relación con el cumplimiento de la ley en los centros y velar por que se subsane.

Conforme al artículo 55 de la Ley penitenciaria de China, en caso de que un delincuente muera durante el cumplimiento de la condena, el centro penitenciario deberá comunicarlo inmediatamente a sus familiares, a la fiscalía popular y al tribunal popular. Si la muerte es por enfermedad, corresponderá al centro penitenciario realizar un peritaje médico. En caso de que la fiscalía popular tenga dudas sobre los resultados del peritaje, podrá volver a examinarse la causa de la muerte. Si los familiares del delincuente tienen dudas sobre los resultados, podrán comunicárselas a la fiscalía popular. En virtud del artículo 27 del Reglamento sobre los establecimientos de detención, en caso de que un recluso muera durante el período de detención, el centro deberá comunicarlo sin demora a la fiscalía popular y a la entidad que tramite el caso, para que un hospital o un médico forense certifique la causa de la muerte, y notificarlo a los familiares del difunto.

Respecto de los comentarios relativos a "la falta de tratamiento para los drogadictos y las personas que viven con el VIH/SIDA" y "la falta de datos estadísticos sobre el estado de salud de los detenidos" en los centros penitenciarios y de detención de China. En China, si un sospechoso, incluidos los drogadictos y las personas que viven con el VIH/SIDA, se pone enfermo, el centro de detención, conforme al artículo 26 del Reglamento sobre los establecimientos de detención, le prestará la asistencia médica oportuna; de ser necesario, recibirá asistencia médica en un hospital local. Respecto de los datos estadísticos sobre el estado de salud de los detenidos, el Departamento de Seguridad Pública de la República Popular China ya ha solicitado a todos los centros de detención del país que lleven un registro detallado del estado de salud de los detenidos y se están desplegando esfuerzos en ese sentido.

3. Respecto del párrafo 13 de las observaciones finales "El Estado parte debe abolir [...] todas las formas de detención administrativa, en particular la 'reeducación por el trabajo'"

La detención administrativa es una sanción administrativa prevista por la ley de China que consiste en la privación temporal de la libertad personal y se aplica solamente a quien haya cometido una infracción que no constituya delito. En la legislación de China se establecen normas estrictas sobre las condiciones relativas a la imposición y aplicación de la detención administrativa y el proceso de examen y aprobación. Conforme a la Ley de sanciones administrativas, las sanciones administrativas que conlleven la restricción de la

libertad personal solo se establecerán por ley y solo podrán ser aplicadas por los órganos de seguridad pública, y se deberán verificar los hechos. Antes de decidir imponer sanciones administrativas, los órganos administrativos notificarán a las partes los hechos, los motivos y los fundamentos en función de los cuales se van a dictar las sanciones administrativas, y les notificarán los derechos que las asisten de conformidad con la ley. Las partes tendrán derecho a exponer su caso y a defenderse. Los órganos administrativos deberán tener plenamente en cuenta las opiniones de las partes y reexaminar los hechos, los motivos y las pruebas presentados por éstas. Los órganos administrativos no impondrán penas más severas a las partes solo porque hayan intentado defenderse. Si la decisión sobre la sanción administrativa no se acepta, podrá solicitarse por ley una revisión administrativa o iniciarse una acción administrativa. Por otra parte, conforme a la Ley de sanciones relativas a la administración de la seguridad pública, si la persona sancionada no acepta la decisión de detención administrativa, al solicitar una revisión administrativa o entablar un procedimiento administrativo, podrá solicitar que se aplase su aplicación. Además, conforme a lo dispuesto en la Ley de indemnizaciones del Estado, los ciudadanos que hayan sido detenidos por error podrán solicitar una indemnización del Estado.

La reeducación por medio del trabajo es un tipo de medida administrativa con carácter obligatorio y un método para reeducar a personas que hayan cometido una infracción leve que no esté tipificada como delito o que hayan infringido las normas de seguridad pública en repetidas ocasiones. Conforme a la Decisión del Consejo de Estado sobre la cuestión de la reeducación mediante el trabajo, ratificada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, existen procedimientos legales estrictos para imponer la reeducación mediante el trabajo al autor de una infracción: el Comité de gestión de la reeducación mediante el trabajo, de conformidad con la legislación en la materia y los reglamentos administrativos, decidirá si se debe imponer esa sanción al autor de la infracción para los que la ley contemple esas medidas, sobre la base de los hechos, su naturaleza, circunstancias y gravedad. Si la persona sometida a reeducación no está de acuerdo con la decisión, podrá solicitar por ley una revisión administrativa o iniciar una acción administrativa ante un tribunal popular; si el órgano encargado de la revisión administrativa o el tribunal popular determinan que la decisión adoptada es incorrecta, esta puede ser revocada o modificada por ley.

En los últimos años, China ha intensificado sus esfuerzos de reforma del sistema de examen y aprobación de sanciones de reeducación mediante el trabajo promoviendo las cinco medidas siguientes: la representación de un abogado en ese tipo de casos, la implantación general de un sistema de consulta, la reducción del plazo de decisión relativo a la imposición de la sanción, la ampliación del ámbito de aplicación fuera de los centros y el fortalecimiento de las tareas de supervisión. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional ya ha incluido la Ley de educación y reforma de los actos delictivos en el programa legislativo y tiene previsto transformar el sistema de reeducación mediante el trabajo en un sistema de educación y reforma de los actos delictivos, en que se definirán el perfil de las personas a quienes estará dirigida esa medida, el proceso de adopción de decisiones, los plazos, las modalidades de aplicación y su examen y supervisión.

Por otra parte, el comentario que figura en ese mismo párrafo de las observaciones finales relativo a tratos de ese tipo contra los miembros de ciertos grupos religiosos y étnicos minoritarios no se corresponde con la realidad.

4. En relación con el párrafo 14 de las observaciones finales "El Estado parte debe velar por que nadie permanezca detenido en ningún establecimiento secreto de detención"

La legislación china incluye disposiciones claras respecto de la protección de la libertad personal de los ciudadanos y prohíbe la reclusión ilegal de cualquier persona. En virtud del artículo 37 de la Constitución, la libertad personal de los ciudadanos de la República Popular de China es inviolable. Ningún ciudadano podrá permanecer detenido a menos que así lo apruebe o decida una fiscalía popular o un tribunal popular, en cuyo caso la aplicación de esa medida corresponderá a los órganos de seguridad pública. También están prohibidas la privación o restricción ilícitas de la libertad personal de los ciudadanos mediante la detención u otros medios, así como los cacheos ilegales. En China no hay centros de detención que funcionen al margen de la ley.

5. En relación con el párrafo 16 de las observaciones finales "[L]a Ley de protección de los secretos de Estado de la República Popular China [...] socava seriamente la disponibilidad de información sobre la tortura, la justicia penal y las cuestiones conexas"

El Gobierno chino considera que es posible que este comentario sea un malentendido surgido a raíz del desconocimiento del sistema legal chino, por lo que China está dispuesta a seguir aclarando las preguntas concretas planteadas en ese párrafo.

a) Respetto del comentario incluido en las observaciones finales relativo a que "[e]sa ley impide la divulgación de información de capital importancia"

El Gobierno chino otorga gran importancia a la divulgación de la información y ha adoptado medidas prácticas para proteger el derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho a la supervisión de los ciudadanos respecto del Estado y la sociedad. Por ejemplo, el Consejo de Estado ha formulado el Reglamento de la República Popular China sobre la divulgación de información oficial, en que se regulan el ámbito de divulgación de la información oficial y las modalidades y procedimientos conexos y se desarrolla plenamente la función que desempeña la información oficial en las actividades socioeconómicas y de producción civil y la vida de los ciudadanos. Por otra parte, al igual que el gobierno de cualquier otro país, China también exige la protección de los secretos de Estado conforme a la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de protección de los secretos de Estado de China, los secretos de Estado son asuntos que atañen a la seguridad y los intereses nacionales y, en virtud de los procedimientos legales establecidos, solo tendrán conocimiento de ellos un número limitado de personas durante un período concreto de tiempo. En el artículo 8 de esa ley se define claramente el contenido concreto de los secretos de Estado.

En la Ley de protección de los secretos de Estado se exige la protección de los secretos de ese tipo, pero la información mencionada en las observaciones finales relativa a las detenciones, los malos tratos infligidos a los detenidos y las violaciones de la ley o de los códigos de conducta por los órganos de la seguridad pública no entra dentro de la definición de secreto de Estado prevista en la ley. En la práctica, todos los órganos de seguridad pública también observan estrictamente las disposiciones de esa ley a la hora de determinar el alcance y la categoría de los secretos de Estado.

- b) **Respecto del comentario incluido en las observaciones finales, según el cual "[e]sa ley dispone que la decisión sobre si una información constituye un secreto de Estado incumbe al órgano del Estado que proporciona la información"**

En virtud de la Ley de protección de los secretos de Estado de China, los órganos y dependencias nacionales de todos los niveles deberán determinar la categoría de los secretos de Estado que proporcionen de conformidad con las normas relativas a los secretos de Estado y al ámbito concreto de aplicación. La legislación china otorga a los órganos y dependencias competentes la autoridad para determinar un secreto de Estado y su categoría, aunque establece asimismo pautas y procedimientos estrictos para garantizar que esa autoridad se ejerza conforme a regla.

- c) **Respecto del comentario incluido en las observaciones finales, según el cual "[e]sa ley impide cualquier proceso público encaminado a determinar si un asunto dado es secreto de Estado y la posibilidad de apelar ante un tribunal independiente"**

En virtud de la Ley de protección de los secretos de Estado de China, los órganos competentes del país se basarán en los procedimientos reglamentarios para determinar si un asunto dado es secreto de Estado. Cuando haya una controversia en relación con el tipo de asuntos que constituyen secretos de Estado o la categoría a que pertenecen, esta podrá remitirse a la autoridad designada para que le dé solución.

En las normas de aplicación de la Ley de protección de los secretos de Estado se incluye también un sistema de subsanación de errores, de modo que, tras la determinación de la categoría de un secreto, si los órganos y dependencias que la determinaron descubren que esta no se ajusta a las normas relativas a la confidencialidad, deberán subsanar la situación sin demora; si las autoridades superiores o los departamentos de seguridad competentes descubren que esta no se ajusta a las normas relativas a la confidencialidad, deberán comunicarlo sin demora a los órganos y dependencias que lo determinaron para que corrijan la situación. Como puede verse, la situación descrita en las observaciones finales respecto del procedimiento para determinar un secreto de Estado no coincide con la realidad.

Por otra parte, los departamentos de protección de secretos de Estado a nivel nacional o provincial son responsables de determinar si un detenido tiene derecho a apelar contra la decisión por la que un asunto se considera secreto de Estado. Si bien los sistemas jurídicos de Occidente y China son distintos, a la hora de determinar si una cuestión es secreto de Estado, ya sea por la vía administrativa o judicial, el objetivo final siempre es el de proteger la seguridad y los intereses nacionales. Los departamentos de protección de secretos de Estado de todos los niveles de China desempeñan sus funciones en estricto cumplimiento de la ley para proteger la información confidencial, por lo que no hay ningún problema en cuanto a ese sistema.

- d) **Respecto del comentario incluido en las observaciones finales, según el cual "[l]a inclusión de un asunto en el campo de aplicación de la Ley de secretos de Estado permite que los funcionarios pertinentes nieguen a los detenidos el acceso a un abogado"**

Conforme al Código de Procedimiento Penal de China, en los casos relacionados con secretos de Estado, la contratación de un abogado por parte de un sospechoso deberá ser autorizada por el órgano de inspección competente. Se trata de una práctica habitual a nivel internacional que tiene por objeto evitar la filtración de secretos de Estado. En la práctica, en los casos relacionados con secretos de Estado, los órganos de seguridad pública autorizarán la contratación de un abogado por parte de un detenido si no hay peligro de divulgación. Los encargados de tramitar un caso que, sin la debida autorización, denieguen

la visita de un abogado a un detenido utilizando como pretexto la necesidad de mantener la confidencialidad de la investigación incurrirán en un acto ilícito del que serán jurídicamente responsables. En una modificación de octubre de 2007 de la Ley de la abogacía se incluyeron disposiciones adicionales sobre las visitas de los abogados. Todo ello contribuye a garantizar que los abogados intervengan sin demora en los casos pertinentes y a proteger los derechos e intereses legítimos de las partes.

6. En relación con el párrafo 17 de las observaciones finales "El Estado parte debe compilar los datos estadísticos que sean de interés para supervisar la aplicación de la Convención a nivel nacional"

Los datos que se solicitan en las observaciones finales son excesivamente detallados y complejos; para un país en desarrollo como China, con una situación nacional compleja, la preparación de ese tipo de estadísticas tiene un costo muy elevado y, por lo tanto, será difícil de lograr a corto plazo. No obstante, el Gobierno de China concede gran importancia a las opiniones del Comité y se esforzará por intensificar la labor estadística en el ámbito de la lucha contra la tortura.

7. En relación con los párrafos 18 y 19 de las observaciones finales "El Estado parte debe derogar cualquier disposición legal que socave la independencia de los abogados y debe investigar todos los ataques a abogados y a autores de quejas", y las denuncias de "acoso" a Teng Biao, Gao Zhisheng, Hu Jia y Li Heping

La Ley de la abogacía de China dispone que las declaraciones de un abogado en un juicio gozan de inmunidad y en el segundo párrafo del artículo 37 de la ley se establece expresamente que no se exigirá responsabilidad jurídica respecto de las declaraciones expresadas por un abogado en un juicio en representación o defensa de un cliente. Al mismo tiempo que la ley regula ese derecho de los abogados, también dispone claramente las excepciones al respecto, a saber, cuando las declaraciones de un abogado pongan en peligro la seguridad nacional, difamen maliciosamente a terceros o perturben gravemente el procedimiento judicial. Por otra parte, en virtud del artículo 306 del Código Penal, se exigirá responsabilidad jurídica a los abogados de la defensa o los procuradores que, en los procedimientos penales, destruyan o falsifiquen pruebas, ayuden a las partes a destruir o falsificar pruebas, o amenacen o coaccionen a los testigos para que modifiquen su testimonio haciendo caso omiso de los hechos o cometan perjurio. Estas disposiciones garantizan el pleno ejercicio del derecho de defensa por parte de los abogados y salvaguardan la autoridad y la imparcialidad de la ley.

Por otra parte, el Gobierno de China está dispuesto a aclarar la situación mencionada en ese párrafo de las observaciones finales relativa al supuesto "acoso" de varias personas.

Gao Zhisheng: varón, nacido el 20 de abril de 1964, de etnia han, antiguo abogado del bufete Shengzhi de Beijing. El 22 de diciembre de 2006 fue declarado culpable de incitación a la subversión del poder del Estado por un tribunal popular y condenado a 3 años de prisión y 5 años de libertad vigilada y a 1 año adicional de privación de los derechos políticos.

Hu Jia: varón, nacido el 25 de julio de 1973. El 3 de abril de 2008 fue declarado culpable de incitación a la subversión del poder del Estado por un tribunal popular y condenado a 3 años y 6 meses de prisión y a 1 año adicional de privación de los derechos políticos.

Hu Jia no es abogado y la pena impuesta a Gao Zhisheng no está relacionada con su profesión, sino que se debe a la comisión por este de un acto delictivo.

Teng Biao: varón, nacido el 2 de agosto de 1973, profesor de la Universidad de Ciencia Política y Jurídica de China y antiguo abogado del bufete Huayi de Beijing. A raíz de que la universidad no estaba de acuerdo en que ocupara puestos concurrentes, ya no se dedica a la abogacía.

Li Heping: varón, nacido el 26 de octubre de 1970, de etnia han, antiguo abogado del bufete Gaobo Longhua de Beijing. En el marco de la evaluación de abogados y bufetes de 2009, Li no aprobó la evaluación del bufete en que trabajaba, por lo que, conforme a la ley, los órganos de la administración de justicia no lo incluyeron en el registro.

8. En relación con el párrafo 20 de las observaciones finales "[L]a falta de un mecanismo eficaz de investigación de las denuncias de tortura, exigido por la Convención", "hay graves conflictos de interés con la función que desempeña la Oficina de la Fiscalía [...] lo que puede hacer que las investigaciones sean ineficaces y tendenciosas"

El Gobierno chino considera que este comentario de las observaciones finales se debe a una comprensión deficiente de la organización de la fiscalía en China, en especial de la independencia de los órganos fiscales chinos.

La característica principal de la organización de la fiscalía de China es la independencia de que goza en virtud de la Constitución. Conforme al artículo 129 de la Constitución, las fiscalías populares de la República Popular China son los órganos nacionales de supervisión jurídica. Conforme al artículo 131, las fiscalías populares ejercen el derecho de acusación previsto por la ley de forma independiente, sin la injerencia de órganos administrativos, organizaciones sociales o particulares. El Código de Procedimiento Penal de China contiene además disposiciones específicas sobre el ámbito de competencias de las fiscalías. Las fiscalías, tribunales y el Gobierno de China son elegidos por la Asamblea Popular, órgano del mismo rango, y los órganos fiscales son independientes de las entidades especializadas de supervisión jurídica de los órganos administrativos, mientras que en muchos países de Occidente se aplica el sistema político de separación de los tres poderes, según el cual los órganos fiscales suelen ser subsidiarios de los órganos administrativos, y en otros países el cargo de Fiscal General es ocupado de manera concurrente por el Ministro o Viceministro de Justicia, y el Ministro de Justicia es responsable de la presentación de candidatos para el cargo de fiscal, cuya función principal es la de acusación pública, y de su nombramiento y destitución.

Esta comparación permite apreciar las diferencias significativas que existen entre los órganos fiscales de China y Occidente en cuanto a su posición constitucional y a su independencia. En China, gracias a la independencia de que gozan los órganos fiscales en virtud de la Constitución, las fiscalías, que actúan con independencia de los órganos administrativos, son responsables de investigar los supuestos casos de tortura cometidos por funcionarios gubernamentales, de modo que no hay un conflicto grave de interés en materia de competencias fiscales. La jurisprudencia china demuestra asimismo que la investigación de casos de tortura por las fiscalías, en calidad de órganos especializados de supervisión jurídica, contribuye a garantizar los derechos e intereses legítimos de los detenidos y promueve una aplicación estricta, justa, civilizada y normalizada de la ley por parte de los órganos competentes.

- 9. En relación con el párrafo 21 de las observaciones finales "El Estado parte debe llevar a cabo una investigación completa e imparcial sobre [...] el Movimiento pro Democracia en Beijing en junio de 1989, proporcionar información sobre las personas que siguen detenidas desde entonces, informar a los familiares sobre sus conclusiones, pedir disculpas y ofrecer reparación, en su caso, y procesar a los responsables del uso excesivo de la fuerza, la tortura y otros malos tratos"**

El Gobierno chino ya ha extraído conclusiones respecto de los disturbios políticos ocurridos en la primavera y verano de 1989. Los veinte años transcurridos desde entonces demuestran que las medidas firmes y oportunas adoptadas en ese momento por el Gobierno chino fueron sumamente necesarias y acertadas. La denominación en las observaciones finales de este incidente como "Movimiento pro Democracia" tergiversa los hechos y contraviene el mandato del Comité.

- 10. En relación con los párrafos 22 a 26 de las observaciones finales "torturas, malos tratos y desapariciones selectivos de que son objeto las minorías nacionales, étnicas, religiosas y otros grupos vulnerables en China, entre ellos los tibetanos, los uigures y los seguidores de Falun Gong", "la devolución de las personas que cruzan la frontera [...] de la República Popular Democrática de Corea"**

Los ciudadanos de China son iguales ante la ley y esta los protege por igual, de modo que no existen casos de torturas, malos tratos ni desapariciones de miembros de minorías nacionales, étnicas, religiosas y otros grupos vulnerables. A continuación figuran las respuestas a las preguntas concretas planteadas en los párrafos 22 a 26.

- a) En relación con los "[h]echos ocurridos en la Región Autónoma del Tíbet y en las prefecturas y condados tibetanos vecinos: información sobre el uso generalizado de la fuerza y otros abusos"**

Los incidentes de vandalismo y otros delitos violentos graves que tuvieron lugar en Lhasa y otros lugares a mediados de marzo de 2008 fueron planeados meticulosamente por las fuerzas separatistas tibetanas; uno de los actos delictivos organizados, cuya comisión fue premeditada y deliberada, se saldó con la muerte de 18 personas inocentes y varios centenares de heridos, socavó gravemente las condiciones de vida y los bienes de la población y afectó enormemente al desarrollo y la estabilidad socioeconómicos de Lhasa y otros lugares, por lo que gran parte de la población exige que los responsables sean sancionados por los órganos judiciales conforme a la ley.

Respecto de los delitos violentos graves ocurridos el 14 de marzo en Lhasa y otros lugares, los órganos de seguridad pública de la Región Autónoma del Tíbet detuvieron a un total de 953 sospechosos de vandalismo y otros 362 presuntos delincuentes se entregaron voluntariamente a las autoridades. Los órganos judiciales de la Región Autónoma del Tíbet impusieron sanciones administrativas de seguridad pública, la firma de una declaración de arrepentimiento y medidas de reeducación a 1.231 sospechosos, tras lo cual quedaron en libertad; impusieron penas a 77 inculpadados por delitos de incendio, saqueo, robo, perturbación de la función pública, provocación y disturbios, congregación de personas para alterar el orden público y congregación de personas para asaltar los órganos estatales;

e impusieron penas a otros 7 inculpados por delitos de espionaje y facilitación ilícita de información confidencial al extranjero.

En la tramitación de los casos relativos a los incidentes delictivos que tuvieron lugar en Lhasa y otros lugares el 14 de marzo, los órganos judiciales de la Región Autónoma del Tíbet desempeñaron sus funciones conforme a la ley y de manera justa y civilizada y salvaguardaron plenamente los derechos e intereses legítimos de los sospechosos. Con el fin de proteger la seguridad y los bienes de la población y preservar el orden social, 242 oficiales de la policía popular y la policía armada resultaron muertos o heridos en acto de servicio (de los cuales 1 sacrificó la vida y otros 23 sufrieron heridas graves) por elementos violentos. Murieron 3 personas involucradas en los actos ilícitos, 1 de las cuales falleció tras haber saltado desde un edificio durante el proceso de detención y recibir atención de urgencia en un hospital. En estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, el Tribunal Popular Intermedio de Lhasa y los tribunales populares regionales y de condado instruyeron las causas contra los inculpados en audiencia pública, durante las cuales se proporcionaron servicios de traducción a los inculpados que pertenecían a minorías nacionales, los abogados de la defensa pudieron formular libremente sus alegaciones, se garantizó plenamente el derecho de los inculpados a la tutela judicial y se respetaron plenamente la dignidad personal y las costumbres de las minorías nacionales.

b) Respetto de la "[d]iscriminación y violencia de que son objeto personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas o religiosas"

En virtud de la Constitución de China, todas las nacionalidades de la República Popular China son iguales ante la ley y el Estado protege los derechos e intereses legítimos de todas las minorías nacionales y prohíbe su discriminación y opresión. En las actividades relativas al cumplimiento de la ley y la tramitación de casos, los órganos de seguridad pública han observado en todo momento el principio de la igualdad de las personas ante la ley y otros principios y no han actuado de manera discriminatoria ni con violencia contra ninguna nacionalidad.

Respetto del caso de Ablikim Abdureyim. Según los datos obtenidos, en abril de 2007 Ablikim Abdureyim fue declarado culpable de incitación a la secesión y condenado a nueve años de prisión y a tres años adicionales de privación de los derechos políticos; actualmente cumple condena en prisión, donde se protegen todos sus derechos en estricto cumplimiento de la Ley penitenciaria y las disposiciones conexas.

c) Respetto de que "[e]l Estado parte debe realizar o encargar inmediatamente una investigación independiente de las denuncias de que algunos miembros de Falun Gong han sido sometidos a torturas y utilizados para trasplantes de órganos, y adoptar medidas, si procede, para velar por que los responsables de tales abusos sean procesados y castigados"

Falun Gong es una secta maligna y la inmensa mayoría de sus practicantes han sido engañados, por lo que también son víctimas. Por consiguiente, el Gobierno chino ha aplicado en todo momento la política de "unir, educar y rescatar a la gran mayoría de sus miembros". La sociedad entera ha realizado un trabajo sumamente paciente y meticuloso para ayudar a los practicantes de Falun Gong a deshacerse de las cadenas espirituales de esa secta maligna. Actualmente, la gran mayoría de antiguos practicantes de Falun Gong ya se han dado cuenta de la naturaleza de esa secta, se han liberado del control espiritual de Li Hongzhi y se han reintegrado en la sociedad y llevan una vida normal.

Las penas impuestas por los órganos judiciales de China a un reducidísimo número de miembros de Falun Gong por haber cometido actos delictivos se ajustan estrictamente a la ley y se han garantizado plenamente los derechos e intereses legítimos de esas personas.

El comentario relativo a que miembros de Falun Gong han sido perseguidos y utilizados para trasplantes de órganos por el Gobierno de China es una falacia en toda regla y es algo que el Gobierno de China ya ha refutado en numerosas ocasiones.

d) La cuestión de la "no devolución" de los inmigrantes ilegales de la República Popular Democrática de Corea

Los órganos de seguridad pública de China, conforme a lo dispuesto en la Ley de control de la entrada y salida de extranjeros, investigan y tramitan los casos de extranjeros que han entrado ilegalmente en el país y, de ser necesario, proceden a su deportación. En los últimos años, diversos ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea han entrado ilegalmente en China por motivos económicos, de modo que no cumplen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo. Al entrar ilegalmente en el país violaron las leyes chinas y perturbaron la normalidad de los procedimientos de inmigración de China. A fin de salvaguardar la seguridad nacional de China y el orden en materia de inmigración, los órganos de seguridad pública, de conformidad con las leyes y los reglamentos pertinentes, tramitan debidamente los casos de extranjeros que hayan entrado ilegalmente en el país, incluidos los inmigrantes ilegales de la República Popular Democrática de Corea. Se trata de un procedimiento completamente apropiado y necesario.

Como país signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, China observa estrictamente y en todo momento las disposiciones previstas en esos instrumentos y cumple escrupulosamente las obligaciones contraídas en virtud de estos. Un ejemplo de ello es el asilo que el Gobierno chino presta desde hace tiempo y de manera desinteresada a más de 300.000 refugiados indochinos. Además, el Gobierno de China siempre ha tratado la cuestión de los inmigrantes ilegales de la República Popular Democrática de Corea con gran cautela y de conformidad con la legislación interna, el derecho internacional y los principios humanitarios. Los hechos demuestran que el método adoptado por China es fiable y eficaz y concuerda con los intereses de todas las partes.

11. En relación con el párrafo 27 de las observaciones finales "preocupación por la falta de una legislación que prohíba todas las formas de violencia contra la mujer, entre ellas la violación marital, y que establezca reparaciones eficaces para las víctimas"

La legislación china prohíbe la violencia doméstica y establece todo tipo de medidas efectivas para prevenirla y detenerla. El artículo 3 de la Ley del matrimonio de China prohíbe la violencia doméstica y el maltrato y abandono de los miembros de la familia. El párrafo 1 del artículo 46 de la Ley de protección de los derechos e intereses de la mujer también prohíbe la violencia doméstica contra la mujer. Se podrá exigir por ley la responsabilidad penal del autor de los abusos domésticos. Conforme a las disposiciones del Código Penal, la violencia doméstica constituye un delito y podrá exigirse responsabilidad penal por lesiones intencionales, abusos y otros cargos. El artículo 45 de la Ley del matrimonio dispone que los responsables de presuntos delitos de violencia doméstica, abuso o abandono del hogar incurrirán en responsabilidad penal conforme a la ley. Conforme a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal, las víctimas podrán presentar una denuncia ante un tribunal popular. Los órganos de seguridad pública deberán realizar las tareas de investigación previstas en la ley y la Fiscalía Popular podrá ejercer la acusación pública conforme a lo previsto en la ley.

La ley no solo prohíbe todo tipo de actos de violencia doméstica, sino que también establece medidas eficaces de auxilio.

En primer lugar, las mujeres víctimas de la violencia doméstica podrán solicitar el divorcio cuando la mediación haya fracasado. El artículo 32 de la Ley del matrimonio establece que, si la mediación fracasa, se concederá el divorcio en casos de violencia doméstica, maltrato o abandono de algún miembro de la familia. En el artículo 46 se establece que en caso de divorcio por violencia doméstica, maltrato o abandono de algún miembro de la familia, la víctima tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios.

En segundo lugar, el Gobierno y los departamentos competentes y las organizaciones sociales deberán, por ley, prestar asistencia a las mujeres víctimas de la violencia doméstica, así como disuadir y detener de inmediato todo acto de violencia doméstica y, conforme a la ley, podrá imponerse una sanción administrativa de seguridad pública al agresor e incluso iniciarse un proceso penal contra este. En el párrafo 3 del artículo 46 de la Ley de protección de los derechos e intereses de las mujeres se establece que los departamentos de seguridad pública, asuntos civiles y administración de justicia, además de las organizaciones de autogobierno de las masas urbanas y rurales a nivel de base y las organizaciones sociales, deberán prevenir y detener la violencia doméstica en sus ámbitos respectivos de competencia y prestar asistencia a las víctimas conforme a la ley.

12. En relación con el párrafo 28 de las observaciones finales "incidentes de violencia contra las mujeres en los centros de detención y falta de información al respecto"

China siempre ha concedido gran importancia a la protección de los derechos e intereses legítimos de las mujeres en los centros de detención y prohíbe la comisión de abusos, castigos corporales y maltratos contra estas. Para proteger mejor los derechos e intereses legítimos de los detenidos y, en particular, de las detenidas, la ley China establece claramente que la custodia de mujeres en centros de detención deberá ser llevada a cabo por personal femenino. Además, los órganos de seguridad pública de todos los niveles disponen de departamentos especializados que supervisan la aplicación de la ley por la policía popular, investigan los casos de actuación ilícita e inician procedimientos penales cuando ello constituya delito. Por otra parte, los órganos de seguridad pública de todos los niveles están sometidos al escrutinio de la Asamblea Popular Nacional, el Gobierno, el Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, las fiscalías populares y los medios de comunicación y la sociedad. En los presuntos casos de tortura corresponderá a los órganos fiscales abrir un expediente y realizar una investigación; en caso de infracción leve que no constituya delito, corresponderá a los órganos de seguridad pública exigir la responsabilidad administrativa del personal pertinente en función de la gravedad.

Por otra parte, en los últimos años, los órganos de seguridad pública han adoptado diversas medidas para prevenir la violencia entre los detenidos y las detenidas en los centros de detención. Por ejemplo, todas las instalaciones de detención están custodiadas, como mínimo, por dos agentes de policía, uno superior y otro subalterno, y están equipadas con un dispositivo de alarma que puede ser activado por un detenido en cualquier momento si considera que ha recibido amenazas de violencia. Además, los detenidos pueden en todo momento concertar una entrevista con el fiscal residente para formular una denuncia.

13. En relación con el párrafo 29 de las observaciones finales "empleo de la violencia en la aplicación de la política demográfica", adopción de medidas coercitivas y violentas por las autoridades locales de la ciudad de Lingyi en la aplicación de la política demográfica, el caso de Chen Guangcheng

El Gobierno chino ha instado a los funcionarios y trabajadores locales de todos los niveles a que en las tareas de planificación familiar actúen en estricto cumplimiento de la ley, apliquen la ley de modo responsable y no se violen los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. El artículo 19 de la Ley de población y planificación familiar establece claramente que la anticoncepción desempeñará un papel principal en la planificación familiar. El Estado garantiza que los ciudadanos conozcan y elijan medidas anticonceptivas seguras, eficaces y adecuadas. Las autoridades nacionales competentes promueven enérgicamente la elección informada de los métodos anticonceptivos y, mediante el despliegue de mayores esfuerzos administrativos, han solicitado que las medidas de planificación familiar se apliquen debidamente en todos los lugares y en estricto cumplimiento de las leyes y los reglamentos. No están permitidas las intervenciones quirúrgicas forzadas de la población ni las detenciones ilegales. Los que infrinjan la ley serán sancionados por vía administrativa o penal.

Ciertamente, hubo personal de condados y pueblos concretos del municipio de Linyi que actuó de manera ilegal en la aplicación de medidas de planificación familiar y que violó los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. En la actualidad, los responsables de esos actos se encuentran en régimen de detención administrativa o han sido destituidos de su cargo. La Comisión Nacional de Población y Planificación de la Familia ha fortalecido por diversos medios la aplicación de medidas administrativas previstas en la ley, ha protegido los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, y ha pedido al personal administrativo de todos los niveles que trabaja en el ámbito de la población y la planificación familiar que extraiga una lección de lo sucedido, haga un ejercicio de autoevaluación, corrija todos los agravios y lleve a cabo cursos de capacitación sistemática y focalizada relativos a la actuación en el marco de la ley y la prestación de servicios de calidad.

Respecto del caso de Chen Guangcheng. Chen Guangcheng: varón, nacido el 12 de noviembre de 1971, de etnia han, residente de la aldea de Dongshigu, pueblo de Shuanghou, condado de Yinan, ciudad de Linyi, provincia de Shandong. El 1º de diciembre de 2006, el Sr. Cheng fue declarado culpable de vandalismo y congregación de personas para alterar el tráfico por el Tribunal Popular del condado de Yinan y condenado a cuatro años y tres meses de prisión. El comentario que figura en las observaciones finales relativo al hostigamiento sufrido por Chen Guangcheng y su abogado no se ajusta a los hechos.

14. En relación con el párrafo 30 de las observaciones finales "El Comité expresa su inquietud por las limitadas medidas de rehabilitación de las víctimas de la tortura, en particular la violencia sexual, la trata, la violencia doméstica y los malos tratos"

El Gobierno chino concede gran importancia a la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. El párrafo 3 del artículo 41 de la Constitución establece que los ciudadanos que hayan sufrido algún daño o perjuicio como consecuencia de la violación de sus derechos civiles por un órgano del Estado o un funcionario público tendrán derecho a la indemnización prevista por la ley. Desde la entrada en vigor de la Ley de indemnizaciones del Estado el 1º de enero de 1995, los órganos administrativos y

judiciales han tramitado los casos de indemnización estatal de conformidad con la ley y las víctimas han recibido la indemnización prevista por la ley, lo cual ha contribuido enormemente a garantizar la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, las personas jurídicas y otras entidades. En 2007, los tribunales chinos dictaron sentencia en 959 casos en los que se otorgaron indemnizaciones del Estado en el marco del procedimiento penal, incluidos casos de indemnización por tortura.

En los casi 15 años de aplicación de la Ley de indemnizaciones del Estado, China ha experimentado un enorme desarrollo social y económico y el nivel de protección de los derechos humanos ha mejorado progresivamente, por lo que algunas de las disposiciones de la ley ya no se ajustan a las necesidades en materia de indemnización estatal. A finales de 2005, los departamentos competentes de la Asamblea Popular Nacional pusieron en marcha los trabajos de revisión y modificación de la ley. En octubre de 2008, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional realizó una primera consideración del texto revisado y solicitó la opinión de todos los sectores de la sociedad. En junio de 2009, el Comité Permanente realizó una segunda consideración del proyecto. El texto revisado amplía los límites de las indemnizaciones del Estado, sigue racionalizando el proceso de indemnización, aumenta el nivel de compensación, normaliza los canales de pago y perfecciona los procedimientos de trabajo y de control del Comité de indemnizaciones, lo cual contribuirá a proteger el derecho de las víctimas de la tortura a recibir una indemnización del Estado.

Además, el 9 de marzo de 2009 las autoridades competentes del Gobierno chino formularon las "Opiniones relativas a la prestación de asistencia a las víctimas de delitos", en que se especificaban claramente los principales ámbitos relativos a los beneficiarios de la asistencia y los procedimientos pertinentes y se solicitaba que en todas partes se estudiara activamente el establecimiento a nivel regional y de departamento de medidas para asistir a las víctimas de delitos y se prestaran los servicios debidos. Actualmente, las tareas se desarrollan sin tropiezos y parte de las víctimas de delitos penales ya ha recibido asistencia de manera oportuna. La aplicación gradual de esas medidas en toda China contribuirá a que las víctimas de delitos, incluidos la tortura, la violencia sexual, la trata, la violencia doméstica y los malos tratos, reciban una mayor atención y asistencia por parte del Estado y la sociedad.

15. En relación con el párrafo 31 de las observaciones finales "raras veces se investiguen y se enjuicien las denuncias de tortura o de malos tratos presentadas contra agentes de las fuerzas del orden", "algunos casos de tortura [...] no den lugar más que a sanciones disciplinarias o administrativas", "[e]l Estado parte debe velar por que todas las denuncias de tortura y de malos tratos se investiguen con prontitud, eficacia e imparcialidad"

El Gobierno de China considera que las situaciones descritas en este párrafo no se ajustan a los hechos.

En primer lugar, en China, los detenidos que hayan sufrido actos de tortura o malos tratos disponen de canales expeditos para interponer una acusación o denuncia. Los detenidos o sus familiares pueden presentar una denuncia, por vía oral o escrita, correo electrónico o entrevistándose con el fiscal permanente, ante el centro de detención, la autoridad competente superior o los órganos fiscales, y otras personas también pueden presentar una denuncia ante las autoridades mencionadas. Los órganos fiscales y centros de detención han instalado buzones de denuncias para los detenidos en todas las áreas de detención y todas las celdas están equipadas con un sistema de alarma en caso de sufrir

malos tratos. Además, de conformidad con las Normas sobre la supervisión de las fuerzas del orden, los departamentos de supervisión policial de los órganos de seguridad pública tramitan y examinan las denuncias y quejas de los ciudadanos formuladas por carta, teléfono u otros medios contra agentes de policía que hayan infringido la ley o las normas de disciplina.

Por otra parte, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de China, dentro de los límites de su competencia, investigarán proactivamente los casos de tortura o maltrato que ocurran en los centros de detención. Aparte de las inspecciones periódicas y no periódicas a los centros de detención por la autoridad superior competente, los inspectores de los órganos de seguridad pública también pueden realizar inspecciones *in situ* de los centros de detención y los órganos fiscales pueden realizar asimismo una inspección *in situ* de las áreas de detención, celdas, salas de interrogatorio y salas de entrevista, con el fin de determinar si se cometen actos de tortura o malos tratos en esos lugares.

En tercer lugar, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Ley de la policía popular de la República Popular China prohíben explícitamente la comisión de actos de tortura o malos tratos contra los ciudadanos, incluidos los presuntos delincuentes. Cuando se descubra un caso de tortura, los órganos de seguridad competentes procederán a aplicar estrictamente las medidas previstas por ley. Cuando se trate de una infracción leve, corresponderá a la autoridad competente superior imponer una sanción disciplinaria o administrativa a su autor; en casos de mayor gravedad, corresponderá a los órganos fiscales abrir un expediente para investigar el caso y procesar a su presunto autor. Respecto de posibles casos de abuso de las medidas coercitivas, uso de la tortura para conseguir confesiones y castigos corporales y malos tratos cometidos contra presuntos delincuentes por un número reducido de policías, los órganos de seguridad pública de China siempre proceden de manera estricta en cuanto estos se descubren, y corresponderá a los órganos fiscales iniciar los procedimientos pertinentes para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos; en casos de menor gravedad que no constituyan delito, corresponderá a los departamentos de supervisión realizar una investigación independiente para determinar la responsabilidad administrativa del personal implicado en función de la gravedad de la infracción e imponer sanciones administrativas, a saber, una amonestación, un demérito, un demérito grave, un descenso, el despido o la expulsión.

En virtud de la legislación china, los tribunales y los órganos fiscales del país ejercen de forma independiente la autoridad judicial y el derecho de acusación, respectivamente, para determinar la responsabilidad penal prevista en la ley respecto de los delitos cometidos por funcionarios públicos durante el desempeño de sus funciones. Los departamentos de supervisión administrativa y de recepción de quejas del Gobierno chino también son responsables de tramitar y examinar las denuncias y acusaciones de los ciudadanos relativas a los actos delictivos cometidos por funcionarios públicos. De ese modo, se garantiza sistemáticamente que se examinen y tramiten de manera oportuna, efectiva, justa y conforme a la ley las denuncias de tortura y malos tratos contra detenidos y se determinen sanciones legales y disciplinarias contra los responsables de esos delitos.

16. En relación con los párrafos 32 y 33 de las observaciones finales
"El Estado parte no ha incorporado en la legislación nacional
una definición de la tortura que se ajuste plenamente a la
definición que figura en la Convención"

Si bien la legislación de China no incluye una definición específica de la tortura, las leyes pertinentes incluyen todos los aspectos relativos a la definición de la tortura que figura en la Convención. La legislación china prohíbe estrictamente y sanciona el uso de

todo tipo de torturas contra toda persona, independientemente de cuál sea la intención o el propósito o de si se realiza en capacidad oficial o con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público.

En primer lugar, no existe el problema mencionado en las observaciones finales relativo a que las leyes chinas no abarcan los actos de tortura de otras personas que actúan en el ejercicio de funciones públicas.

El Código Penal de China puede emplearse para formular todo tipo de acusación por actos de tortura, independientemente de la identidad, la intención o el propósito del perpetrador. Al mismo tiempo, la legislación china también incluye disposiciones especiales respecto de los delitos cometidos por funcionarios públicos y otras personas con un estatuto especial. Por ejemplo, el párrafo 4 del artículo 238 del Código Penal establece que el personal de los órganos del Estado que utilice su autoridad para realizar una detención ilegal será castigado con mayor severidad. Respecto del uso de la tortura por funcionarios judiciales para obtener pruebas, el artículo 247 del Código Penal tipifica como delitos el uso de la tortura para obtener una confesión y el uso de la violencia para obtener una declaración. Respecto del uso de la tortura contra un detenido por parte de un funcionario de un centro de detención, el artículo 248 del Código Penal tipifica como delito el maltrato a un detenido y otros abusos. La tipificación específica de estos delitos permite imponer una pena más severa si el autor es un funcionario público y protege más eficazmente los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

Por otra parte, las políticas y medidas adoptadas por China para prohibir la tortura no solo están dirigidas a funcionarios del ámbito de la justicia penal, sino que también se aplican a funcionarios administrativos que trabajan en el ámbito del cumplimiento de la ley y a otros funcionarios. Quienes sin ser funcionarios del Estado cometan alguno de los actos mencionados a instancias de un funcionario público u otra persona que desempeñe funciones a título oficial, o con su consentimiento o aquiescencia, en virtud de las disposiciones del Código Penal en materia de complicidad, serán considerados cómplices del delito principal y procesados sobre la base del delito cometido por el funcionario público.

En segundo lugar, la legislación china establece que los actos de tortura que deben ser sancionados no solo incluyen los actos que causen sufrimiento físico, como las palizas y la utilización de instrumentos de tortura, sino que también incluyen actos que causen sufrimiento psicológico, como los abusos e insultos. Por ejemplo, el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal prohíbe estrictamente el uso de la tortura para obtener una confesión o recurrir a la amenaza, la incitación, el engaño u otros medios ilícitos para reunir pruebas. En ese sentido, por "amenaza" se entenderá todo método utilizado habitualmente para causar sufrimiento psicológico y la categoría de "otros medios ilícitos" incluye todos los métodos que pueden causar sufrimiento físico o psicológico. El artículo 238 del Código Penal tipifica como delitos la detención ilegal de una persona y la privación ilícita de su libertad personal por cualquier otro medio; si estos actos van acompañados de palizas o insultos, se impondrá una pena más severa. En virtud de los artículos 247 y 248 del Código Penal, los delitos de obtención de una confesión mediante la tortura, uso de la violencia para obtener una declaración y malos tratos a un detenido no solo harán referencia a la utilización de métodos violentos, sino también al empleo de métodos que causen un gran sufrimiento psicológico, como los malos tratos o los insultos. Los funcionarios públicos que, en el desempeño de sus funciones, causen sufrimiento psicológico a una víctima por medio de insultos, calumnias, registros ilegales, el allanamiento de morada, la privación ilegal de la libertad de culto de los ciudadanos o la vulneración de las costumbres de las minorías nacionales serán sancionados conforme a la ley.

En resumen, las disposiciones de la legislación china relativas a la prohibición y penalización de la tortura están en consonancia con las disposiciones pertinentes de la Convención.

17. En relación con el párrafo 34 de las observaciones finales "los datos concretos sobre las penas de muerte no sean públicos", "preocupación por las condiciones de detención de los presos condenados en espera de la ejecución de la pena de muerte, en particular la utilización de grilletes durante las 24 horas del día", "la extracción de órganos de personas condenadas a muerte"

La cuestión relativa a la existencia o eliminación de la pena capital no es un asunto puramente jurídico, sino que entraña complejas cuestiones económicas, políticas, culturales, sociales y civiles. Puesto que las condiciones nacionales son distintas en cada país, el tiempo necesario para cumplir el objetivo de reducir gradualmente y finalmente eliminar la aplicación de la pena de muerte también es distinto. En estos momentos, China aún no está en condiciones de eliminar la pena de muerte.

Por otra parte, la pena de muerte en China solamente se aplica a los autores de delitos de suma gravedad. La aplicación de la pena de muerte debe estar en conformidad con las disposiciones y los procedimientos previstos en la ley. En los últimos años se han logrado nuevos avances en materia de justicia penal en lo que respecta a la protección de los derechos humanos de los presos condenados a muerte. A partir del 1º de enero de 2007, el Tribunal Popular Supremo unificó las competencias relativas al examen y autorización de los casos de pena de muerte, con lo cual se puso fin a 20 años de descentralización parcial de esas competencias y se demostró nuevamente la política de mantenimiento, control estricto y aplicación prudente de la pena de muerte.

En marzo de cada año, el presidente del Tribunal Popular Supremo presenta a la Asamblea Popular Nacional las estadísticas combinadas de China relativas a las penas de muerte, incluidos los casos de supresión temporal por dos años, las penas de cadena perpetua y las penas de más de cinco años de prisión, que también se hacen públicas a todo el mundo.

Respecto de la utilización de grilletes durante las 24 horas del día para los condenados a muerte. El empleo de grilletes para los condenados a muerte es una medida temporal y preventiva que tiene por objeto impedir los comportamientos violentos, la fuga, el suicidio o la perturbación de los procedimientos de supervisión y no constituye un trato o pena cruel, inhumano o degradante. Por otra parte, el Reglamento de trabajo de los centros de detención prohíbe estrictamente la utilización de grilletes como método de tortura en los interrogatorios o castigo corporal. Durante la visita a China en 2005 del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, las autoridades pertinentes tomaron nota de las preocupaciones planteadas por este en ese sentido y actualmente están realizando los estudios correspondientes.

Respecto de "la extracción de órganos de personas condenadas a muerte sin que éstas presten su consentimiento libremente y con conocimiento de causa". En China, para utilizar el cadáver o los órganos del cadáver de un condenado a muerte es preciso observar los siguientes principios.

El primero es el principio de la voluntariedad. En virtud del artículo 7 del Reglamento sobre el trasplante de órganos humanos de China, los ciudadanos tienen el derecho de decidir si donan o no sus órganos; ninguna organización o individuo podrá obligar a otra persona a donar sus órganos por medio de la fuerza, el engaño o la incitación.

Los condenados a muerte, en calidad de ciudadanos, también tienen el derecho legal de decidir si donan sus órganos. Respecto de la cuestión de la donación de órganos por los condenados a muerte, el Gobierno chino se ha adherido en todo momento a los principios humanitarios y de voluntariedad de los condenados a muerte y sus familiares, y despliega medidas enérgicas para detener, investigar y castigar los casos de reventa y uso ilegal de órganos extraídos a presos condenados a muerte. En la práctica, los cadáveres y los órganos de cadáveres de condenados a muerte utilizados actualmente por China son donados voluntariamente por los condenados a muerte cuando aún viven o por sus familiares, de conformidad con la práctica internacional de donación de órganos.

El segundo es el principio de la gratuidad. La legislación china prohíbe a toda organización o individuo realizar ningún tipo de negocio con órganos humanos o actividades conexas. Los infractores serán sancionados de manera estricta conforme a la ley. En la práctica, no existe el fenómeno relativo a la utilización de cadáveres u órganos de cadáveres de condenados a muerte para obtener beneficios ilícitos.

El tercero es el principio del examen y la aprobación rigurosos. La legislación china limita estrictamente el ámbito en que se puede utilizar el cadáver o los órganos del cadáver de un condenado a muerte y prohíbe su uso indebido. Por otra parte, ha establecido un procedimiento riguroso de examen y aprobación y prohíbe su uso no autorizado, así como su utilización por centros médicos o sanitarios no cualificados.

En resumen, el comentario que figura en ese párrafo de las observaciones finales relativo a la extracción de órganos de personas condenadas a muerte no se ajusta a los hechos.

18. En relación con el párrafo 35 de las observaciones finales "utilización del tratamiento médico obligatorio para detener a algunas personas en hospitales psiquiátricos por motivos que no son médicos"

El artículo 18 del Código Penal de China dice lo siguiente: "Los enfermos mentales cuyos actos tengan consecuencias dañinas en un momento en que sean incapaces de reconocer o controlar su propia conducta no incurrirán en responsabilidad penal, una vez ello haya quedado establecido mediante los procedimientos de peritaje previstos en la ley, pero se ordenará a su familia o tutor que los vigilen estrictamente y se encarguen de su tratamiento médico. Cuando sea necesario, serán objeto de un tratamiento médico obligatorio por parte del Gobierno".

El tratamiento médico obligatorio se aplica a enfermos mentales que hayan cometido un delito pero que no sean penalmente responsables de él. En realidad, el tratamiento médico solamente se aplica a un enfermo mental que haya cometido un delito pero que no sea penalmente responsable de él en casos de asesinato, lesiones graves, incendio premeditado o perturbación grave del orden social, destrucción de las instalaciones públicas, actos que pongan en peligro la seguridad pública y otros actos que tengan consecuencias graves. La aplicación del tratamiento médico forzoso tendrá que ser confirmada por un perito judicial psiquiátrico. Si el enfermo mental a quien se aplique el tratamiento o su tutor cuestionan el tratamiento médico forzoso, pueden solicitar un nuevo peritaje. El comentario relativo a la detención de algunas personas en hospitales psiquiátricos por motivos que no son médicos no se corresponde con la realidad. Respecto del caso de Hu Jing mencionado en las observaciones finales, según los datos obtenidos, esa persona no está en ningún centro médico de tratamiento obligatorio de China.

19. En relación con el párrafo 36 de las observaciones finales "la insuficiencia de la formación práctica en materia de prevención de la tortura que el Estado parte proporciona a los agentes del orden", "la falta de formación específica del personal médico para detectar señales de tortura y de malos tratos en los establecimientos de detención"

China concede gran importancia a la formación de los agentes del orden público en materia de lucha contra la tortura, y los órganos de seguridad pública y fiscales del país han puesto en marcha una serie de medidas con las que se han logrado resultados sumamente satisfactorios.

Los órganos de seguridad pública de China han integrado la formación de la policía civil en materia de derechos humanos en el proceso general de formación y capacitación. En 2003, los órganos de seguridad pública pusieron en marcha el sistema de "los tres cursos obligatorios", a saber cursos para nuevos agentes, cursos para el personal del cuadro orgánico y en relación con los ascensos en el cuerpo de policía y cursos prácticos para agentes de policía civil de base y de primera línea. Hasta la fecha, un total de 345.000 miembros del personal directivo de todos los niveles han recibido formación en toda China, 715.000 agentes de policía civil han asistido a cursos relativos a los ascensos, y cada año los agentes de policía de base y de primera línea reciben, como mínimo, 15 días de formación intensiva. Durante la formación, se han impartido de manera focalizada el curso sobre el "Pacto contra la tortura" y otros cursos conexos, con el fin de fortalecer la formación jurídica en materia de leyes y reglamentos penales y administrativos relativos a las normas internacionales de derechos humanos y lograr que se atribuya igual importancia al derecho sustantivo y al derecho procesal, así como la armonización del derecho público con el derecho privado. Gracias a la capacitación mencionada, ha mejorado continuamente el nivel de aplicación de la ley por parte de un gran número de agentes de policía civil, ha mejorado significativamente el nivel general de aplicación de la ley y se ha fortalecido la capacidad y el nivel de protección de los derechos humanos. En el futuro, los órganos de seguridad pública de China seguirán ampliando sus actividades de capacitación para mejorar considerablemente la capacidad y el nivel de respeto y protección de los derechos humanos por parte de los encargados de hacer cumplir la ley.

Los centros de detención de China otorgan gran importancia a fortalecer la capacitación del personal médico y todos los años organizan cursos especializados de capacitación. El Departamento de Seguridad Pública está estudiando medidas para seguir fortaleciendo los contenidos de la formación relativos a la detección de señales de tortura o malos tratos.

Los órganos fiscales de China hacen hincapié continuamente en la capacitación de los fiscales asignados a los centros de detención y, en los últimos años, la Fiscalía Popular Suprema ha compilado material de capacitación en ese sentido. En marzo de 2008, la Fiscalía Popular Suprema, tras promulgar las medidas para la supervisión de las cárceles y fuera de las cárceles, los centros de detención y el sistema de reeducación mediante el trabajo por las fiscalías populares, también organizó cursos de formación para los fiscales asignados a los centros de detención de todas partes. Entre marzo y abril de 2009, la Fiscalía Popular Suprema organizó además tres cursos de formación para los responsables de las oficinas permanentes de los órganos fiscales en los centros penitenciarios y de detención de todo el país, en los que se impartieron conocimientos sobre las maneras de proteger los derechos e intereses legítimos de los detenidos y la investigación y tramitación de casos de presuntos delitos de abuso de autoridad, incluidos la tortura y los malos tratos, y de otro tipo. Gracias a esta formación sumamente específica se han seguido regulando y promoviendo las tareas de supervisión de los órganos fiscales en los centros de detención.

Con el fin de mejorar la capacidad de los fiscales para detectar señales de tortura y de malos tratos, teniendo en cuenta que esta cuestión suele estar relacionada con conocimientos médicos y especializados, los órganos fiscales también pueden realizar la evaluación médica al detenido que haya sido víctima de los presuntos actos de tortura o malos tratos por conducto de los departamentos técnicos internos o pueden encargarla a otras instituciones de peritaje médico para, de ese modo, proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los detenidos.

20. En relación con el párrafo 37 de las observaciones finales "El Comité aprecia [...] la importancia que el Estado parte concede a la lucha contra el terrorismo, así como [...] sus intentos de reforzar la legislación antiterrorista y otras medidas pertinentes", "insta al Estado parte a que vele por que [...] las medidas antiterroristas se apliquen respetando plenamente [...] las normas internacionales de derechos humanos"

El Gobierno chino agradece el reconocimiento del Comité respecto de los esfuerzos desplegados por China en la lucha contra el terrorismo y está dispuesto a seguir teniendo plenamente en cuenta las opiniones y recomendaciones procedentes de todas las partes, incluidas las del Comité, para combatir el terrorismo eficazmente y por todos los medios a nivel nacional e internacional, y a velar por una mayor protección de los derechos humanos en ese ámbito. Como parte de esas prioridades, el Gobierno chino seguirá fortaleciendo la labor legislativa en materia antiterrorista y, en especial, hará de la protección de los derechos humanos uno de los principios básicos de esa legislación.
